

# ***Ilegalidad y sistema político en Colombia: la agenda de Uribe Vélez***

*El artículo analiza una empatía colombiana proverbial, hasta ahora irresoluble, entre ilegalidad y sistema político. Ambos mundos se encuentran consustanciados desde hace tiempo; alcanzando su máximo nivel de confluencia durante la gestión del presidente Samper. Los gobiernos de Pastrana, y en especial de Uribe, surgen como respuesta a esa composición que hacía peligrar la subsistencia política del Estado. Uribe enfrenta tres áreas del problema: corrupción, guerrilla y paramilitares. La falta de éxitos concretos responde a la naturaleza dinámica de los problemas, asentados en arraigados vínculos entre política y sectores ilegales.*

**Francisco Gutiérrez Sanín**

## ***Introducción***

**L**as relaciones de políticos colombianos con actores ilegales vienen de muy atrás (v., p. ej., Guerrero). Sin embargo, fue solo con un doble salto cualitativo –la eclosión del narcotráfico y del conflicto interno<sup>1</sup>– que el problema de la ilegali-

---

**Francisco Gutiérrez Sanín:** profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

**Palabras clave:** sistema político, grupos ilegales, cultura política, Gobierno, Colombia.

1. En Colombia hubo guerrilla desde principios de la década de los 60, pero solo desde finales de los 70 logró pasar al centro del escenario nacional.

---

***Buena parte del apoyo a Uribe proviene de una fuerte pulsión moralizadora de la mayoría del electorado***

dad en la política pasó a los primeros lugares de la agenda pública. Por razones que escapan a los límites de este artículo, los vínculos entre políticos, criminales y señores de la guerra crecieron más o menos ininterrumpidamente hasta 1994, año en el que el escándalo por la financiación de los «narcos» a la campaña ganadora de Ernesto Samper convenció a sectores muy amplios de la opinión, y a las elites socioeconómicas, de las consecuencias potencialmente desastrosas que podría tener el seguir por esa senda. Los dos últimos presidentes han sido elegidos en nombre de propuestas anticorrupción; en efecto, hay evidencias de que la población estaba más interesada en que Álvaro Uribe «moralizara», que en que «reprimiera»<sup>2</sup> (Gutiérrez Sanín 2003a). En ese sentido, hay mucha más continuidad de lo que se creería entre el gobierno precedente, de Andrés Pastrana, y el actual.

El «mandato» anticorrupción que Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-?) han intentado interpretar está atravesado por dos tensiones básicas. En primer lugar, en nombre de mejorar la democracia amenazan con minarla. En efecto, tanto Pastrana como Uribe –mucho más el segundo– subieron al poder y gobernaron con un discurso antiparlamentario –cuyo núcleo era la noción de que el Congreso y los políticos son el epicentro de la corrupción– que se reflejó, por ejemplo, en las intenciones de revocatoria del mandato del Congreso y en los referendos propuestos por ambos. En ese sentido han intentado seguir la senda del «presidencialismo fuerte», una plantilla de gobierno bien conocida en el área andina. Y si Pastrana careció de recursos y habilidad para avanzar en esa dirección, Uribe está mucho mejor colocado para hacerlo.

Pero si la lucha anticorrupción significa enfrentar a un cierto conjunto de actores ilegales, las políticas frente al conflicto constituyen otro punto focal en donde hay también continuidad. Pastrana y Uribe le han apostado al fortalecimiento del Estado, intentando recuperar el monopolio de los medios de coerción a través de una combinación de fortalecimiento militar y negociaciones con los ejércitos ilegales. El esfuerzo es inobjetable. Los potenciales problemas tienen que ver con los medios utilizados, en dos planos: por un lado, las posibilidades

---

2. En todos los sondeos de opinión recientes casi la mitad de la población sigue apoyando propuestas pacifistas de uno u otro tipo, y esto de hecho se ha manifestado en una cierta evolución del actual gobierno, que comenzó con la aserción contundente «no conversamos con terroristas», y terminó –como ha sucedido invariablemente desde 1982– con propuestas de paz, esta vez dirigidas hacia los paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

reales de éxito que ofrecen; por el otro, las relaciones de tensión dinámica que tienen con el régimen democrático. Y es que en nombre de un Estado fuerte se pueden debilitar o desmontar algunos mecanismos de gobierno esenciales para la subsistencia de la democracia (Burt). De hecho, al principio de su gobierno Uribe propuso un intercambio entre «menos libertades» y «más seguridad», intercambio que se expresaría legislativamente en el llamado «estatuto antiterrorista».

Así como continuidad, también hay diferencias sustanciales: en contenido, estilo y situación. Este artículo esbozará algunos de los problemas que se presentan en las tres grandes áreas en las que Uribe ha enfrentado el problema del vínculo de actores ilegales con el sistema político: corrupción, guerrilla y paramilitares<sup>3</sup>. Sugiero una conclusión sencilla: el presidente no ha solucionado uno de los problemas endémicos del sistema político colombiano, a saber, que la política no cabe plenamente dentro de la legalidad (Gutiérrez Sanín 2003b). A medida que se combate a algunos ilegales y se estorban sus vínculos con el sistema, otros ocupan su lugar.

### ***Corrupción***

Como dije en la introducción, buena parte del apoyo a Uribe proviene de una fuerte pulsión moralizadora de la mayoría del electorado. Las razones subyacentes son varias. En primer lugar, frisando la década de los 90 la corrupción de la política colombiana alcanzó niveles espectaculares. El cuadro 1 muestra al lector un estimativo –seguramente incompleto, basado en la prensa– de las acusaciones penales contra congresistas en esa década. No solo nos encontramos con vínculos con el narcotráfico: también hay peculado, crímenes contra la administración pública, y homicidio simple<sup>4</sup> y múltiple. En segundo lugar, el episodio Samper mostró que si la corrupción se salía de madre ello podía poner en cuestión algunos de los parámetros sobre los que estaba construida la estabilidad del sistema político, en particular la alianza estratégica con EEUU<sup>5</sup>. Terce-

---

3. Solo se analizará el tema de los narcos, que requiere un tratamiento aparte, cuando éstos aparezcan vinculados a otros actores ilegales. La omisión, aparte de simple espacio, se debe a varios factores: hay algunas evidencias sobre problemas claves que aún no han salido a la luz, la continuidad entre Pastrana y Uribe es con respecto de ellos casi total, y los actores relevantes (gobierno de Estados Unidos, p. ej.) consideran que el tema se encuentra básicamente bajo control.

4. El presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes disparó, en un ataque de furia, contra un competidor local.

5. En realidad, la cuestión podría ir un poco más allá. Es razonable la hipótesis de que la caída del Muro de Berlín, y los cambios en la economía mundial, hicieron que el «peaje» que cobraban los políticos por su intermediación fuera percibido como prohibitivo por las elites socioeconómicas colombianas. Sin embargo, no perseguiré tal pista en este artículo.

***Según todas  
las evidencias  
el Gobierno ha optado  
unilateralmente  
por la fórmula de paz  
a costa de justicia***

ro, el ciudadano común estaba simplemente fatigado de ver cómo todos aquellos que jugaban fuera de las reglas obtenían mejores resultados que él. Uribe propuso una agenda de relegalización que apelaba a un sentido básico de justicia compartido por la mayoría de los colombianos. Una manera de ver lo anterior es a través del cuadro 2. Como se observa allí, los temas en que Uribe resulta consistentemente mejor librado que sus dos predecesores tienen que ver con la manera de lidiar con la ilegalidad: corrupción, narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo. Por ello no es de extrañar que una de las grandes consignas de esta presidencia haya sido la «lucha contra la politiquería y la corrupción».

No solo en ese terreno, sino en la utilización de tal lucha para debilitar el Congreso, hay una continuidad obvia entre Uribe y Pastrana. Así, Uribe inicialmente planteó la revocatoria del organismo y su disminución (de dos cámaras grandes a una cámara pequeña), lo que se haría por voluntad propia o por la vía de un referendo. Sin embargo, pese a que el Congreso estuvo aislado de cara a la opinión, es institucionalmente fuerte, y a través de un permanente cabildeo y de una reforma política de iniciativa legislativa logró moderar sustancialmente –al menos por el momento– las aspiraciones antiparlamentarias del presidente. Su tamaño se disminuyó<sup>6</sup>, en efecto, en unas pocas sillas, el bicameralismo se mantuvo, y el referendo de Uribe –tanto por control constitucional de los altos tribunales como por resultado del trámite legislativo– finalmente tuvo menos mordiente anticongreso de lo que inicialmente se había planteado<sup>7</sup>. Por lo demás, las iniciativas anticorrupción que este gobierno ha emprendido han ido muriendo con exquisita discreción, prácticamente sin excepción.

Un giro inesperado cambió igualmente el panorama: algunas reformas administrativas que el Congreso requería, aplazadas por su autismo, finalmente empezaron a mostrar sus efectos, de modo que los niveles de corrupción parlamentaria, aún altos, han bajado, y los grandes escándalos de los últimos años han afectado mucho más al Ejecutivo. La más golpeada ha sido la Policía, seguida de cerca por el Ejército y algunos ministerios. Como se ve en el cuadro 3, la aprobación del Congreso ha mostrado una notable mejoría, lo cual es más

6. Un cambio que, a mi juicio, solo puede considerarse negativo.

7. Cuando el referendo fue derrotado –no por tener una mayoría en contra, sino por no obtener la cantidad de votos necesarios– Uribe pidió una reconsideración del censo electoral, pero las autoridades electorales colombianas respondieron negativamente. El presidente respondió con una denuncia tremendista contra «la politiquería», que no tuvo eco en la opinión.



bien sorprendente, máxime si se tiene en cuenta que diversos sondeos muestran que los colombianos hoy por hoy son bastante escépticos frente a la democracia. En la medida que las oportunidades de hacer política antiparlamentaria eficaz se encogen, el tema ha pasado a segundo plano en la agenda de preocupaciones gubernamentales.

## ***Guerrilla***

Desde hace bastante tiempo son conocidos los vínculos entre la guerrilla y algunos de los políticos de los partidos tradicionales, sobre todo en el sur del país. Es el «clientelismo armado» (Peñate). Aparte de la pura coerción, los guerrilleros tienen varias formas de establecer nexos de mutuo beneficio con los políticos. En primer lugar, pueden pedir un impuesto sobre las finanzas municipales –generalmente el 10%–, que a veces es aprovechado por el político para cobrar un «peaje». En segundo lugar, éste puede aprovecharse del control territorial guerrillero para marginar a sus adversarios; hay, por consiguiente, interés en fortalecer su presencia territorial. En tercer lugar, está la potencial vinculación de ambos con los cultivos ilícitos. En cuarto lugar, el político puede caer simplemente bajo el chantaje o la coerción del grupo armado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido muy agresivas en este particular, y los políticos que no se le someten son frecuentemente amenazados y –si no se apresuran a dejar la región– asesinados.

Uribe ha intentado romper los vínculos del sistema político con la guerrilla, sobre todo en aquellas partes del país donde eran más obvios (Arauca, por ejemplo). El balance no es claro, pues el Gobierno escogió una estrategia de detenciones masivas en las que encarcelaron a cientos de personas que con toda probabilidad eran inocentes. Tales detenciones han gozado de generosos despliegues de publicidad, pero su eficacia es dudosa, para no hablar ya de sus efectos laterales y su legalidad. En algunas poblaciones (p. ej. Quinchía, Risaralda) hubo afectados que declararon que se trataba de una persecución contra partidos legales de oposición. Las autoridades no han podido exhibir resultados contundentes de este tipo de actividad.

Al comienzo de su gobierno, Uribe intentó también crear zonas especiales de seguridad, en donde a través de una serie de dispositivos –que básicamente coincidían en el aumento de la presencia y prerrogativas militares en la zona dada– esperaba reducir los niveles de criminalidad común, y la actividad y presencia de los ejércitos ilegales. Sin embargo, una evaluación interna de su funcionamiento llevó a la conclusión de que las zonas habían sido inútiles, si no contraproducentes, y no se han vuelto a crear.

¿Ha sido, pues, Uribe exitoso en su intento de desvincular el sistema político en determinadas regiones de la guerrilla? Posiblemente sí, en dos sentidos simples pero muy importantes. Primero, en efecto se ha logrado la disminución de los cultivos ilícitos, con los cuales la guerrilla mantiene un vínculo estrecho<sup>8</sup>.

Segundo, el Ejército ha lanzado varias ofensivas en gran escala, a través de las cuales llegó a regiones del país donde hacía mucho tiempo no había entrado. Los dominios territoriales de la guerrilla son básicamente porosos –no reemplaza al Estado, sino que se articula con él– e inestables, por lo que los políticos no tienen grandes incentivos para guardar estricta fidelidad a ningún actor armado; se van acomodando a las reglas que ponen los nuevos entrantes.

### ***Paramilitares***

En la actualidad, el Gobierno está adelantando conversaciones de paz con los paramilitares. Es un proceso extremadamente complejo que ha estado expuesto a múltiples críticas, tanto de poderosos actores internacionales –comenzando por el gobierno estadounidense– como de muchos sectores de la opinión colombiana. Las razones de estas resistencias son varias, y aquí no hago sino exponerlas brevemente.

***Los paramilitares  
han tejido  
en estos últimos  
20 años una densa red  
de complicidades  
con los organismos  
de seguridad***

En primer lugar, aunque todos los ejércitos ilegales colombianos han cometido aterradoras atrocidades –un ejemplo de las más recientes podría ser la masacre de 34 campesinos perpetrada por las FARC en el norte del país–, solamente los paramilitares adoptaron como estrategia el asesinato sistemático de la población civil para conseguir sus objetivos de expansión territorial. La abrumadora mayoría de esos crímenes sigue impune. En esas condiciones, el balance entre paz y justicia resulta difícil. Máxime cuando según todas las evidencias el Gobierno ha optado unilateralmente por la fórmula de paz a costa de justicia, y solo bajo presión internacional ha introducido el problema de la reparación de las víctimas a la ecuación<sup>9</sup>.

En segundo lugar, hoy por hoy el paramilitarismo en Colombia es una fuerza altamente criminalizada. Aunque el tema, una vez más, amerita una consideración detallada y rebasa los límites de este texto, vale la pena recordar que el balance entre lo «criminal» y «lo político» siempre ha sido un problema funda-

8. Aunque toca advertir que: a) las promesas, más bien grotescas, que hizo el ministro del Interior al principio del Gobierno de acabar con los cultivos ilícitos en un año resultaron, como era previsible, imposibles de cumplir; b) lo mismo puede decirse de la de acabar con las FARC en un plazo semejante; c) la idea de que las FARC son una simple dependencia del narcotráfico, sostenida por el Gobierno durante un cierto periodo, es una simplificación insostenible.

9. Por ejemplo, cuando la Alcaldía de Medellín propuso la creación de una comisión de la verdad fue bruscamente rechazada por el comisionado de paz, encargado de las conversaciones con los «paras».

mental en los grupos de autodefensa. Los primeros de ellos fueron de hecho creados por narcotraficantes, y actuaron básicamente bajo la égida del cartel de Medellín. Sin embargo, ahí donde el paramilitarismo echó raíces, su composición social se hizo mucho más compleja (Romero). Se convirtió en una alianza donde el papel principal lo tenían los ganaderos, los narcos, los militares y los comerciantes (en cualquier orden, dependiendo de la región), pero en donde a veces también tenían alguna voz sectores medios e incluso populares, organizados o no. El balance entre intereses de los narcotraficantes –al fin y al cabo una fuerza ilegal, considerada por EEUU un problema de seguridad nacional– y de los otros sectores que participaban en la coalición paramilitar siempre fue muy delicado, y originó varias guerras intestinas. A finales de la década de los 80, Henry de Jesús Pérez (jefe paramilitar altamente narcotizado de Puerto Boyacá) y Pablo Escobar (jefe del cartel de Medellín) se enfrentaron sangrientamente; Pérez fue asesinado, y a partir de ahí los paramilitares decidieron establecer un balance más ponderado entre el narco y otros componentes de su coalición.

Los líderes de las autodefensas en la década de los 90, los hermanos Castaño, construyeron su enorme poder sobre la base de una complicada relación de cooperación y enfrentamiento con los narcos. Otros numerosos choques siguieron, y en medio del proceso de paz con Uribe, Martín Llanos y Miguel Acevedo (cabezas visibles de dos facciones paramilitares del oriente del país) están en guerra, mientras que en Antioquia el Bloque Cacique Nutibara (BCN) barrió del mapa al Bloque Metro, finalmente asesinando a su líder, un tal comandante Rodrigo. La especificidad de los últimos acontecimientos es que los narcos parecen haber ganado por fin la batalla por la supremacía que los enfrentó a facciones que, participando en el negocio, buscaban mayores vínculos con el mundo de la legalidad. En las guerras internas han triunfado invariablemente las facciones más delincuenciales. La saga del BCN puede ser un buen ejemplo. Una buena porción, no solo de su dirección sino de sus militantes –según lo demostró el proceso de reinserción de ese grupo, que fue un pionero en el proceso de paz, y se reintegró a la vida civil en 2003– proviene de las bandas de Medellín (v. cuadro 4), y varios de los comandantes que participan a nombre de las autodefensas en el proceso de paz, son reconocidos narcos en plena actividad. Factores como éste han sido la principal razón para las acerbas críticas públicas de Washington al proceso, y su insistencia en que ni participará en él ni suspenderá las órdenes de extradición que pesan sobre miembros de la dirección «para».

En tercer lugar, los paramilitares han tejido en estos últimos 20 años una densa red de complicidades con los organismos de seguridad. Esto, a propósito, lo han dicho en todos los tonos los paramilitares, tanto en sus publicaciones de

más largo aliento (v., p. ej., Aranguren), como en la propia antesala del proceso de paz, en la que declararon que el Estado había creado un monstruo, y ahora intentaba negarle la paternidad. ¿En qué consistió la «creación del monstruo»? Como dije anteriormente, una de las especificidades del paramilitarismo en Colombia fue su alto componente criminal<sup>10</sup> (no solo narco). Sin embargo, sin la provisión sistemática de armas, apoyo logístico, protección y legitimidad por parte del Ejército, su enorme expansión hubiera sido imposible. Las evidencias que muestran al Ejército colombiano como «condición necesaria pero no suficiente» del fenómeno paramilitar, son hoy por hoy abrumadoras. Tanto en Puerto Boyacá (Medina Gallego), como también en los paramilitarismos más débiles y menos conocidos de la periferia del conflicto colombiano, el Ejército no solo tuvo una participación clave, sino incluso a veces la iniciativa, en la creación de unidades de autodefensas. Es posible que esta actividad haya sido particularmente febril durante el gobierno de Samper (1994-1998), al amparo de la política de Cooperativas de Seguridad (Convivir), en donde se dio un manto de laxa legalidad a este tipo de iniciativas, pero ningún gobierno ha sido capaz de reducirlas sustancialmente, ni siquiera de desestimularlas.

Los críticos del proceso de paz con las autodefensas afirman que básicamente consistirá en un perdón que el Estado se conceda a sí mismo. Además de unilateral (algunas de las contradicciones intraestatales en relación con el paramilitarismo se analizan en Romero), el planteamiento solo recoge una parte del problema: es que, de cara al futuro, el Estado tendrá que lidiar con miembros de la fuerza pública acostumbrados a jugar con actores ilegales, a matar civiles (o a proteger a asesinos de civiles), y a salirse casi siempre con la suya. Es verdad que en las regiones da la impresión clara de que el Ejército está acosando con más energía que antes al paramilitarismo (según observaciones sobre el terreno), y en algunas partes ha habido un salto notable. Pero esto es insuficiente, y deja intactas las estructuras regionales de poder paramilitar. Es verdad también que gracias a la Constitución de 1991 algunos militares han podido ser encausados por apoyar o cohonestar a los paramilitares, pero el avance ha sido modesto, y precisamente algunas de las reformas clave que Uribe ha tramitado en el Congreso harían prácticamente imposible identificar futuros abusos de la fuerza pública.

En cuarto lugar, el otro componente clave de la receta paramilitar –los notablato locales y regionales– constituye también un gran dolor de cabeza. Una vez más, el involucramiento de un sector de las elites socioeconómicas colombianas con

---

10. En ese sentido la teoría de las FARC, cuya posición oficial es que Ejército y paramilitarismo son uno solo, es insostenible.

el paramilitarismo no constituye ningún secreto. Ha sido proclamado por los paramilitares mismos (v. Aranguren, entre otros muchos), por el gobierno de Pastrana<sup>11</sup>, y también por algunos de los propios interesados. Por ejemplo, reiteradamente los gremios de ganaderos –nacionales y regionales– han dejado saber su empatía con el paramilitarismo<sup>12</sup>. De nuevo nos encontramos con un serio problema tanto de cara al contenido mismo de una negociación como al futuro. Estos terratenientes y ganaderos –que durante años han convivido con diversas formas de ilegalidad– han aprendido en los últimos 20 años que pueden utilizar impunemente a matones para dirimir conflictos de tierras. No menos importante es que a través de la coalición paramilitar y de otros mecanismos han obtenido una clara sobre-representación –en relación con su peso demográfico y su dinamismo económico– en las políticas de seguridad del país. Dicho de otra manera, hubo personas y grupos que no solo no resultaron castigados por su apenas velada participación en la experiencia paramilitar, sino que además lograron accesos de poder al diseño de políticas públicas clave. Si la expectativa es que en el futuro los conflictos sociales puedan ser canalizados a través de la institucionalidad, esto resulta particularmente grave.

En quinto y último lugar, nos encontramos con los vínculos entre paramilitarismo y política legal –no solo autoridades locales y regionales sino también congresistas y funcionarios. Como en el caso de la guerrilla, se trata de una relación signada por la ambigüedad. Hay que tener en cuenta que en toda relación prolongada los actores aprenden. En la década de los 80, vemos a los más atrasados políticos tradicionales –es decir, miembros de los dos grandes partidos históricos, Liberal y Conservador– colaborando activamente con el paramilitarismo (Leal/Dávila; Medina Gallego). En algunas regiones, después de la reconquista paramilitar los nuevos amos llamaron de vuelta al viejo personal político, simple y llanamente porque ellos no sabían gobernar; los tradi-

11. En su momento, el ministro de Defensa Civil de Pastrana, Luis Fernando Ramírez, levantó un gran revuelo, al denunciar la «hipocresía» de la sociedad colombiana, que criticaba los vínculos del Ejército con el paramilitarismo, pero en cambio no decía una palabra sobre sus apoyos y financiadores entre los empresarios legales (Secretaría General Andi).

12. Es preciso subrayar que aquí los gremios de ganaderos no representan plenamente la paleta de opiniones de sus miembros. Como una de las principales víctimas del secuestro y –en general– de la actividad guerrillera, hubo ganaderos que participaron en la conformación de grupos paramilitares; otros los requirieron, o los acogieron con entusiasmo. En algunos casos, empero, ese entusiasmo se enfrió, pues los paramilitares se comportaron como guardias pretorianos, y demostraron ser extorsionistas tan dedicados como los guerrilleros. Algunos ganaderos lamentaban sin mayores reatos el dominio de los nuevos amos (Castro Caicedo). Uno de Puerto Boyacá decía: «los grupos de autodefensa, pues unos son los que están en el campo vigilando las organizaciones, las cabezas principales son los que están prácticamente haciendo plata a costillas de quien llegue, porque eso ya se volvió un negocio, está bien que los tipos lo protegen a uno, pero eso es un negocio». Otros denunciaban delitos y asesinatos de las autodefensas. No conozco un solo caso en que los gremios de ganaderos hayan denunciado estas extorsiones y crímenes.

cionales, que por una razón u otra habían perdido sus cotos de caza, de repente se veían cómodamente reinstalados.

Sin embargo, no en todas partes existió una colaboración armónica entre política tradicional y extrema derecha armada: por ejemplo, en Quindío la entrada del narcotraficante, y sostenedor abierto del paramilitarismo, Carlos Lehder, fue furiosamente combatida por conservadores y liberales (algunos de ellos muy corruptos), que sentían que el recién aparecido, con su flujo infinito de recursos y su feroz demagogia antipolítica, terminaría desplazándolos (el episodio está narrado con algún nivel de detalle en Gutiérrez Sanín 2000). De hecho, a medida que se iba profundizando el espíritu de la Constitución de 1991, y que se empezó a ver que el discurso anticorrupción y antipolítica tradicional rendía buenos frutos electorales, los paramilitares empezaron a reinventarse a través de una propuesta «renovadora», que criticaba acerbamente la inmoralidad pública –a veces adoptando una tesis también popular en el mundo legal, según la cual la corrupción era un mal aún peor que la guerrilla– y a las fuerzas tradicionales, haciéndolas responsables de los desastres del país, no solo por su indiferencia frente a la subversión, sino por su tendencia a la cleptomanía y al inmovilismo. Hay un *in crescendo* de denuncias, sobre todo después de la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997, cuando los paramilitares, bajo el mando unificado de Carlos Castaño, trataron de presentarse como un creíble «tercer actor» de la guerra política. No se trató solo de una ofensiva verbal. En varias regiones y ciudades importantes, respaldaron estridentemente a «tercerías» contra «candidatos tradicionales» –para nombrar un solo caso notable, La Dorada–, y también trataron de erigirse en veeduría moral de las alcaldías popularmente elegidas en los territorios bajo su influencia. Esto lo hacían sometiendo a los alcaldes y concejales a periódicos controles, y naturalmente también participando en la escogencia de candidatos.

En la actualidad, el paramilitarismo tiene presencia en el Congreso –posiblemente no el 35% de los parlamentarios, que en un momento de entusiasmo proclamó su líder, Salvatore Mancuso, que eran suyos, pero sí un número respetable–, y la capacidad de interactuar fluidamente con los liderazgos de todas las banderías legales regionales y locales. En una ciudad importante como Cúcuta, se encontró una profunda penetración del paramilitarismo, tanto en la política local como en los organismos de seguridad. Según lo muestran las evidencias, esa interacción se mueve en varios niveles: solicitud de porcen-



tajes y contratos a las autoridades municipales, facilidades de movilización y comunicación, a veces protección directa y garantías de control territorial. Hasta el momento, no está claro en qué sentido las negociaciones del Gobierno con los paramilitares cambiarán el panorama.

### Referencias

- Aranguren, Mauricio: *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*, Oveja Negra, Bogotá, 2001.
- Burt, Jo Marie: «State Making against Democracy» en Jo Marie Burt y Maurice Philip (eds.): *Politics in the Andes: Identity, Conflict and Reform*, University of Pittsburgh Press, 2004, pp. 247-268.
- Castro Caicedo, Germán: *En secreto*, Planeta, Bogotá, 1996.
- Guerrero, Javier: «La economía esmeraldífera y la violencia: la microhistoria institucional y contra-institucional» en *Quinto Congreso de Historia de Colombia*, Icfes, Bogotá, 1986, pp. 227-248.
- Gutiérrez Sanín, Francisco: «Politicians and Criminals: Two Decades of Turbulence, 1978-1998» en *International Journal of Politics, Culture and Society* vol. 14 N° 1, 2000, pp. 71-87.
- Gutiérrez Sanín, Francisco: «La radicalización del voto en Colombia» en Gary Hoskin, Rodolfo Masías y Miguel García (comps.): *Colombia 2002. Elecciones, comportamiento electoral y democracia*, Uniandes / Fundación Konrad Adenauer / Registraduría Nacional / Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2003a, pp. 87-114.
- Gutiérrez Sanín, Francisco: «Les partis politique et la démocratie en Colombie: une histoire naturelle du vice et de la vertu» en *Problèmes d'Amérique Latine* 49, 2003b, pp. 39-70.
- Hartlyn, Jonathan: «Drug Trafficking and Democracy in Colombia in the 80's», Working Paper, Institut de Ciències Polítiques y Socials, Barcelona, 1993.
- Leal, Francisco y Andrés Dávila: *Clientelismo, el sistema político y su expresión regional*, Iepri / Tercer Mundo, Bogotá, 1991.
- Medina Gallego, Carlos: *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá*, Documentos Periodísticos, Bogotá, 1990.
- Peñaranda, Ricardo y Javier Guerrero (comps.): *De las armas a la política*, Tercer Mundo / Iepri (Un), Bogotá, 1999.
- Peñate, Andrés: «Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province», Oxford, 1991, tesis de maestría.
- Romero, Mauricio: *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003*, Iepri / Planeta, Bogotá, 2002.
- Secretaría General Andí: *Conflicto, negociación y paz* N° 151, 6/9/2000.

Cuadro 1

### Colombia. Acusaciones penales contra congresistas (años 90)

Motivo	Número de acusaciones
Vínculos con el narcotráfico	41
Peculado	9
Violación del régimen de inhabilidades y otros crímenes contra la administración pública	17
Homicidio común	4
Homicidio múltiple	1
Otros	10

Fuente: Cálculos basados en *El Tiempo*.

Cuadro 2

**Colombia. Apoyo a las políticas de los últimos tres presidentes**

Políticas	Samper	Pastrana	Uribe
Corrupción	56	43	78
Economía	61	31	48
Desempleo	46	17	33
Guerrilla	46	35	71
Narcotráfico	50	44	70
Costo de la vida	46	21	32
Relaciones internacionales		75	74
Paramilitares		26	59

Fuente: *El Tiempo* 9/11/02.

Cuadro 3

**Colombia. Opinión popular sobre el Congreso**

	Favorable	Desfavorable
Feb-00	26	62
May-00	14	76
Ago-00	19	70
Dic-00	25	59
Jul-01	24	65
Sep-01	28	59
Dic-01	28	57
Abr-02	23	64
Jul-02	28	61
Sep-02	32	53
Nov-02	40	49

Fuente: *El Tiempo* 9/11/02.

Cuadro 4

**Colombia. Proveniencia de miembros del BCN según participación previa en alguna organización ilegal**

Organización	Cantidad	%
FARC	4	0,53
ELN	0	0
Ejército	71	9,48
Bandas y delincuencia común	280	37,38
Otros frentes paramilitares	34	4,54
Ninguno	360	48,1
<b>Total</b>	<b>749</b>	

Fuente: Programa de Paz y Reconciliación, Alcaldía de Medellín, 2004.